

DEDUCE ACLARATORIA

Excelentísima Cámara Federal:

Oscar Julián Valtier, por la representación de “**PORTA HNOS SA.**”, en estos autos “**INCIDENTE DE RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION s/AMPARO AMBIENTAL**” (**Expte. Nº21076/2016/2**), con domicilio en 23076792119, a V.E. digo:

1. Objeto:

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 166 inciso 2º del Código Procesal, en legal tiempo y forma vengo a solicitar a V.E. que aclare la resolución de fecha 03.08.2017, dictada en el recurso directo interpuesto por esta parte y correspondiente a los presentes autos.

En función de las consideraciones de hecho y de derecho que serán expuestas a lo largo de esta presentación, solicitamos se aclare la resolución recurrida, en los términos que surgen de cada uno de los apartados que integran este escrito.

2. Cita de legislación no vigente:

2.1. En la Resolución del 3.8.2017 esa Excma. Cámara dispone rechazar el recurso de queja interpuesto por mi representada.

Entre los principales fundamentos de los tres votos que componen la resolución negatoria, se hace expresa referencia al art. 32 de la Ley 25.675 y al criterio amplio de interpretación de las reglas procesales que debe utilizarse en asuntos ambientales.

2.2. En efecto, como uno de los principales argumentos de los tres integrantes de la Sala, se invoca el segundo párrafo del art. 32 de la Ley N° 25.675.

Para mayor claridad, transcribo la norma en cuestión:

ARTICULO 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la

competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes. (La parte subrayada es la que V.S. cita).

2.3. En particular, el voto del **Dr. Vélez Funes** se refiere a la Ley 25.675, y en relación a la misma señala:

“En la misma, el artículo 32 establece: “... *El Juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes...*” siendo la aplicación de éste principio el que debe primar -a mi entender- en la solución del presente planteo.

Y más adelante agrega ...”*No puedo dejar de advertir que pese a lo invocado por el recurrente, quien sostiene que la realización de la audiencia en el estadio procesal en el que se encuentra la causa, reflejaría solamente la postura que han dado las partes en sus informes, toda vez que no se ha producido prueba alguna todavía, el Juez puede extender el objeto de la acción a cuestiones no sometidas por las partes a su decisión, pero que hagan a la dilucidación del conflicto planteado y que pueda afectar derechos de la sociedad en su conjunto* (artículo 32 citado)” (el énfasis es nuestro).

2.4. Ahora bien, tal como lo establece la norma bajo análisis, la eventual posibilidad que la norma le daría a los jueces¹, sólo y exclusivamente podría ejercerse en oportunidad **del dictado de la sentencia**.

¹ Ponemos en potencial el verbo por lo que se dirá más abajo.

Claramente la norma no habilita al juez a modificar el proceso –incluyendo cuestiones no sometidas a su consideración-, durante la tramitación del proceso, sino solo en la sentencia.

Otra interpretación no puede haber, por más que se fuerce el sentido de la norma. Eso es así desde que la facultad que se concede a los jueces mediante el referido artículo, es de naturaleza excepcional en nuestro ordenamiento procesal y de carácter restrictivo como todas las excepciones, con lo cual, siendo excepcional y preciso, mal puede extenderse a otros estadíos procesales que los específicamente previstos por la norma que los concede.

Sin embargo, V.E. ha validado esta actuación del a quo, por cierto improcedente, a la luz de la interpretación precedente, que es la correcta e inobjetable.

2.5. Pero eso no es lo más grave.

En efecto, corresponde poner de resalto que si bien el citado artículo asigna a los jueces amplias facultades, el párrafo final de dicho artículo que “permitía” al juez extenderse en la sentencia a cuestiones no planteadas por las partes, fue vetado por el Decreto 2413/02 del P.E.N. de promulgación de la citada ley.

Para que no queda duda alguna, se precisa que el párrafo vetado es el siguiente: “*... Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes*”.

En el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional citado, se explica que el fundamento del VETO, es el respecto del principio de congruencia procesal, y la garantía del debido proceso.

En efecto, el referido Decreto establece:

Que en el artículo 32 del Proyecto de Ley, en la oración que expresa: "Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes", se autoriza a los jueces de las Provincias a dictar sentencia en la materia comprendida en la norma sancionada, apartándose del principio de congruencia procesal.

Que apartarse de dicho principio, constituye un defecto descalificado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION con fundamento en la doctrina sobre arbitrariedad, por violatorio de la garantía del debido proceso (artículo 18 de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA).

Que el defecto se acentúa por la circunstancia que algunas constituciones provinciales, otorgan rango constitucional al principio de congruencia procesal.

En otras palabras, V.E. ha fundado su voto en una norma no vigente, más precisamente, que jamás tuvo efectos jurídicos, dado que fue expresamente vetada en oportunidad de su promulgación.

2.6. En consecuencia, y toda vez que V.E. ha tomado como fundamento principal de su resolución, una norma que jamás estuvo vigente, debería corregir el sentido de la resolución, admitiendo el recurso directo, ya que el juez se habría excedido en sus facultades al fundar la modificación del objeto del proceso en la misma norma, **reiteramos**, no vigente.

En consecuencia, solicitamos a V.E. se aclare, luego de este **grave error de derecho**, el temperamento a seguir como consecuencia de haber basado su decisión en una norma no vigente.

3. Cita incorrecta de precedentes jurisprudenciales:

3.1. De la lectura de la resolución recurrida, puede extraerse del voto del **Dr. Eduardo Avalos**, que toma como otro de los fundamentos para decidir como lo hizo, el precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Asociación de Superficierios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental, del 29 de agosto de 2006.

Ahora bien, cabe resaltar que la cita del considerando 23) del referido pronunciamiento se efectúa en forma parcial.

Veamos.

3.2. En el fragmento citado la CSJN hace referencia al criterio amplio de interpretación de las reglas procesales en materia ambiental. Pero ese mismo “considerando” completo, aclara que esos criterios, en ningún caso pueden aplicarse a costa de sacrificar el principio de congruencia y el derecho de defensa.

En otras palabras, contrariamente a lo sostenido por el referido Magistrado, la Jurisprudencia de la CSJN señala el derecho de defensa como un límite a las atribuciones del Juez en los términos del art. 32.

3.3. Para mayor claridad, nos permitimos transcribir en forma completa el considerando 23) de la causa Asociación de Superficierios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental, del 29 de agosto de 2006, a saber:

“23) Que si bien no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador, y que un examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego, esos apropiados criterios hermenéuticos no pueden, por un lado, entronizarse en una fuente de naturaleza superior que autorice a privar al demandado de ejercer apropiadamente su garantía de defensa, y por su intermedio, el de tutelar derechos amparados por otras cláusulas constitucionales, tan merecedoras de protección como los invocados por la demandante. Y por el otro y con una trascendencia de pareja significación, que mediante el incumplimiento de reglas procesales que, como el principio de congruencia, están amalgamadas con el debido proceso, se impida al órgano judicial dictar un pronunciamiento fundado, expreso, positivo y preciso sobre todas y cada una de las cuestiones introducidas por la actora y de las defensas articuladas por el demandado, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo a las partes (arts. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, del código de rito).

No es redundante puntualizar que la conclusión expresada encuentra un decisivo apoyo en el texto legal en vigencia que reglamenta los derechos comprometidos en el sub lite, pues frente a la sanción por parte del Congreso de la Nación de una disposición que autorizaba al magistrado a extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes (ley 25.675, art. 32 in fine), el Poder Ejecutivo de la Nación observó ese texto en particular sobre la base de considerar, cabe enfatizarlo, que desconocía el principio de congruencia procesal y que ese apartamiento, según la jurisprudencia de esta Corte, constituye un defecto que descalificaba al pronunciamiento con fundamento en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias (decreto 2413/02, art.4)”.

Como puede apreciarse, de la lectura del considerando bajo análisis surge que la conclusión del Superior Tribunal es diametralmente opuesta al sentido que

pretendió asignarle la resolución del 01.08.2017, dado que este último encuentra en la violación al derecho de defensa como un límite a las atribuciones del Juez en los términos del art. 32 CSJN.

3.4. Este criterio de la CSJN ha sido ratificado además en pronunciamientos posteriores², con lo cual no nos encontramos aquí frente a una interpretación antojadiza y unilateral de una de las partes, sino en un corriente jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de la Nación.

3.5. En consecuencia, frente a la invocación de un fallo como fundamento de la resolución, que, como hemos visto, dice lo contrario, debería V.E. reconsiderar el sentido de la resolución en crisis.

Es que esta aclaratoria reviste un carácter esencial para mi mandante, ya que con independencia de cómo V.E. ha resuelto el presente recurso, resulta significativo para la presente causa que V.E. aclare que ni el art. 32 de la Ley 25.675, ni la jurisprudencia de la CSJN facultan a los jueces –incluso en asuntos vinculados a la tutela colectiva del ambiente– a fallar más allá de lo sometido a su consideración por las partes; y que las amplias facultades que el art. 32 asigna a los jueces en ningún caso pueden desconocer el principio de congruencia procesal, ni afectar el derecho de defensa de las partes.

4. Cita de providencia inexistente al momento de interponer el recurso directo:

4.1. Finalmente, y como tema tampoco menor, V.E. funda también la resolución respecto de la cual se deduce la presente aclaratoria en una providencia del juez de primera instancia del 1 de agosto del corriente, obrante a fs. 1353 (ver voto del Dr. Avalos), que esta parte no pudo entonces conocer.

Cabe señalar que dicha resolución jamás pudo ser tenida en cuenta por V.E. para resolver el recurso, desde que el recurso se interpuso con fecha 31.07.2017 y contra el proveído del 26.07.2014.

En otras palabras, al momento de la interposición del recurso, dicha providencia no existía, y en consecuencia, conforme la totalidad de la

² Véase 1032. XLII. RECURSO DE HECHO "Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable c/ Comisión Nacional de Energía Atómica, del 26 de mayo de 2010

jurisprudencia y doctrina procesal pacífica y unánime, mal pudo ser tomada en consideración para resolver.

4.2. En efecto, mediante la inclusión de elementos posteriores a la resolución del 26.07.2017 impugnada y que en nada la modifican, V.E. ha resuelto tomarla como un elemento de decisión de no poca trascendencia –de hecho la cita y funda su decisión en ella- para juzgar, contrariando toda los principios procesales vigentes.

4.3. De allí que, desde que jamás pudo tomarse en modo alguno una resolución posterior, no conocida al momento de recurrir, e insistimos, que no modifica el sentido de la resolución del 26.07.2017, la resolución de V.E. en tal sentido es rayana con la nulidad.

En efecto, V.E. debió considerar, a los efectos de resolver el recurso directo, exclusivamente los elementos preexistentes del expediente, anteriores a la resolución del 26.07.2017, pero nunca los posteriores.

Ello pues, porque afecta el derecho de defensa de la parte recurrente, al no poder defenderse respecto de la misma. Por ello, y porque mal pudo ser tenido en cuenta en ese hecho por la parte recurrente al momento de recurrir, es que V.E. tampoco debió ponderarla.

4.4. De allí que, V.E. deberá aclarar ese punto y reconsiderar su decisión, en base a los elementos existentes al momento del dictado de la resolución impugnada, esto es al 26.07.2017 y prescindir de los posteriores que, como se dijo, jamás pudieron ser tenidos en cuenta por el recurrente, dado que se estaría violando el derecho de defensa de éste último.

5. Reserva del Caso Federal:

Para el supuesto e improbable caso que no se hiciera lugar a la presente aclaratoria y/o no se corrigieran los errores no menores puestos de manifiesto en el presente, desde ya hago reserva del Caso Federal en razón de verse afectados derechos de esta parte constitucionalmente protegidos en los arts. 17, 18, 23 y 28 de nuestra Carta Magna, de conformidad con lo establecido con el art. 14 de la ley 48.

6. Petitorio:

Por lo expuesto, a V.E. solicito:

6.1. Tenga por interpuesta en legal tiempo y forma la aclaratoria deducida;

6.2. Aclare, en cuanto ha sido materia de recurso, la resolución del 03.08.2017.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA